

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

| | |
|------------------|--|
| PROCESO | Ordinario |
| DEMANDANTE | Mireya Ortega Reina |
| DEMANDADO | AFP Colfondos S.A. y COLPENSIONES |
| PROCEDENCIA | Juzgado 021 Laboral del Cto. de Medellín |
| RADICADO | 05001 3105 021 2021 00376 01 |
| INSTANCIA | Segunda |
| PROVIDENCIA | Sentencia Nro. 142 de 2022 |
| TEMAS Y SUBTEMAS | Ineficacia de traslado |
| DECISIÓN | Adiciona y confirma |

Hoy, **catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al grado jurisdiccional de consulta en favor de **Colpensiones**, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido en contra de esta entidad y de la **AFP Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías**, por **Mireya Ortega Reina**, con radicado único nacional 05001 3105 **021 2021 00376** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado en sala virtual, mediante acta **Nº. 021**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

Para lo que interesa a esta instancia, de acuerdo a lo decidido en primera, se tiene que las pretensiones de la actora se orientaron a obtener la declaratoria de ineficacia del traslado efectuado del RPMPD al RAIS a través de la AFP Colfondos S.A., y a tener como válida, vigente y sin solución de continuidad la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, condenándose a Colfondos S.A., a devolver al RPMPD administrado por Colpensiones, todos y cada uno de los aportes efectuados, incluidos los rendimientos financieros y cuotas de administración, y a esta última entidad a recibirlos. Pide condena en costas para las accionadas.

En sustento de ello afirma que, nació el 4 de julio de 1962, realizando aportes al extinto ISS entre julio de 1983 y noviembre de 2005, para un total de 734,14 semanas; que el 11 de noviembre de 2005 se trasladó a Colfondos S.A, contando con un total de 1.522 semanas en toda la vida laboral; que al momento de afiliarse al régimen de ahorro individual con solidaridad, no le suministraron una asesoría clara y concreta sobre la edad mínima y el saldo que debía acreditar en su cuenta de ahorro individual, es decir, con qué IBC debía cotizar con el fin de obtener una pensión anticipada o completar el capital para poder acceder a la ordinaria de vejez, así como tampoco le informaron a qué edad se le redimía el bono pensional, ni la diferencia entre la mesada pensional que recibiría en el RAIS y en el Régimen de prima media, y que podía retornar antes de cumplir los 47 años. Que mediante precálculo, del 15 de junio de 2021, Colfondos le informó que su capital era insuficiente para financiar la pensión, cuando liquidada la mesada en el régimen de prima media obtendría una pensión de \$1.966.478,00; que le solicitó a Colfondos S.A y a Colpensiones la ineficacia del traslado, negada por ambas entidades.

En auto del **15 de septiembre de 2021, se admitió** y ordenó dar trámite a la acción. Enteradas de la actuación las demandadas allegaron escritos de contestación así:

Colfondos, manifiesta que no le constan o no son ciertos los hechos narrados por la actora, no obstante, afirma que el traslado efectuado obedeció a que se le ofreció *"toda la asesoría especializada e idónea"* adicional a que se le *"informó acerca de las ventajas y desventajas que aparejaba trasladarse a este fondo, sus variables financieras, los requisitos para generar el derecho a las prestaciones económicas. Así como las características y diferencias propias de cada de una u otro fondo de pensiones, con el fin de determinar la conveniencia de permanecer en uno u otra administradora conforme a sus expectativas pensionales."* De igual forma se le expuso que *"el valor real de la pensión sería determinado una vez se cumplieran los requisitos para acceder a la pensión y una vez la misma fuera solicitada ante la AFP COLFONDOS S.A, pues la misma se calcula a partir de tres variables: La edad del posible pensionado y su grupo familiar determinando la expectativa de vida de los beneficiarios de la pensión; el capital acumulado a la fecha del cálculo incluyendo aportes obligatorios y voluntarios, rendimientos y bono pensional si hay lugar a él; y la tasa de rentabilidad esperada a largo plazo del Fondo Especial de Retiro Programado; siendo la rentabilidad resultado del ejercicio en el mundo financiero, sin que ello implique riesgo para la afiliada pues la superintendencia financiera en su deber de garante establece unos topes mínimos de rendimientos por los cuales las AFP deben responder a sus afiliados"*. Presentó **oposición a la prosperidad de las pretensiones**, y formuló las excepciones de mérito que denominó inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, innominada o genérica, ausencia de vicios del consentimiento, validez de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, ratificación de la afiliación al fondo, prescripción, compensación, e inexistencia de perjuicios.

Colpensiones, de los hechos, admite como cierta la fecha de nacimiento de la actora, la afiliación al régimen de prima medida, el número de

semanas cotizadas a dicha entidad, el traslado efectuado a Colfondos, el total de aportes a ambos regímenes, la respuesta emitida por Colfondos en la que le indicó que su capital era insuficiente para financiar la pensión, la solicitud de traslado de fondo enviada y las respuestas emitida. Frente a los demás supuestos de hecho manifestó que no le constan. Se **opuso a la prosperidad de las pretensiones** y formuló las excepciones de mérito de: carga dinámica de la prueba, petición antes de tiempo, imposibilidad de retornar al statu quo por múltiples afectaciones al sistema general de pensiones, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, improcedencia para decretar la ineficacia del traslado o inexistencia de la obligación, inexistencia de vicios del consentimiento, improcedencia de intereses moratorios, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del derecho de afiliación al régimen de prima media con prestación definida, falta de causa para demandar y de interés en su vida pensional, buena fe, temeridad, devolución de cuotas de administración, seguros previsionales y comisiones debidamente indexadas, imposibilidad de condena en costas, prescripción, y compensación.

La primera instancia terminó con **sentencia proferida por el Juzgado 21 Laboral del Circuito**, declarando la ineficacia del traslado que la demandante hizo del RPM al RAIS, ordenando a la AFP Colfondos S.A. el retorno a Colpensiones y a esta a recibir, los saldos de su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y la garantía de pensión mínima; también ordenó a la AFP la restitución de las cuotas de administración y el seguro previsional por el tiempo de vinculación de la accionante al RAIS, declaró probada la excepción de ausencia de vicio en el consentimiento y no configuradas las demás, gravó con costas a Colfondos S.A. a favor de la demandante y fijó el monto de las agencias en derecho y finalmente, dispuso el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones. El a quo, luego de hacer referencia a los puntos frente al tema de la ineficacia de traslado decantados por la jurisprudencia especializada, entre

ellos, las normas a aplicar cuando se analiza vía judicial, la imprescriptibilidad de la acción, la inversión de la carga de la prueba y la responsabilidad profesional de las AFP frente a los afiliados, citando las normas que han regulado el deber de información, concluye que en el caso de autos Colfondos S.A. no demostró la debida ilustración, no obstante, ello, a su juicio no es suficiente para pregonar la ineficacia peticionada, pues debe quedar evidenciado el perjuicio al que se ve sometido por la movilidad entre regímenes, lo que fue debidamente acreditado, en tanto, la actora en el régimen de ahorro individual recibiría a los 57 años, una mesada mínima, mientras que en el RPM sería de \$1.966.487,00, encontrando entonces procedente imponer al acto de tránsito entre regímenes la sanción solicitada, pero bajo los supuestos del artículo 272 de la Ley 100 de 1993, al verse comprometidos derechos mínimos de la afiliada, imponiendo en consecuencia las restituciones a que se hizo alusión y condena en costas a la AFP.

Al no haberse presentado recurso de apelación, se conoce la decisión en el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones.

De la oportunidad para presentar alegatos ante esta instancia hizo uso **Colpensiones**, indica que no se puede declarar la nulidad o ineficacia de un acto jurídico que no solo fue válido sino que produjo efectos, en tanto, la actora efectuó aportes, adicional a que la afiliación al fondo privado se dio en el ejercicio legítimo del derecho a la libre escogencia, según lo dispuesto por el artículo 13 literal b) de la Ley 100 de 1993, no pudiéndose predicar la existencia de un error por vicio del consentimiento.

Aduce que no se esta ante una falta de asesoría o un error en el consentimiento, sino frente a una falta de interés, poca interacción o negligencia de la parte frente a su vida laboral, adicional que se debe considerar que para la fecha en que se dio el traslado de régimen, solo se

exigía de las administradoras el lleno del formulario con las exigencias requeridas por la superintendencia financiera, por lo que imponer una carga adicional, resultaría desproporcionado e imposible de cumplir.

Demandante, solicitando se aplique la línea jurisprudencial reiterada y pacífica frente al tema de la ineficacia, en la cual el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, indica que el deber de información se encuentra en cabeza de los fondos privados de pensiones, y que el formulario de afiliación no acredita dicho deber, correspondiéndole a la entidad acreditar que le dio al afiliado una asesoría clara, completa y eficiente, que le permitiera tener presente las consecuencias que le acarrearía su traslado en su futuro pensional, lo que, para el caso, brilla por su ausencia.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

Teniendo en cuenta lo decidido por el a quo, y el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si con ocasión de la declaratoria de ineficacia de la movilidad de régimen pensional de la demandante hay lugar a ordenar su retorno al RPMPD, en caso afirmativo que conceptos se deben restituir.

Pues bien. Unánime, pacífica y reiterada ha sido la línea de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, en torno al tema de la carencia de efectos del traslado de régimen pensional cuando no está precedido de una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación

definida y sus posibles consecuencias futuras. En sentencia SL1452 de 2019 dijo:

En relación con la validez del acto de afiliación a cualquiera de los regímenes pensionales, comienza la Sala por precisar, que, como se indicó en sede de casación, conforme el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, «los trabajadores tienen la opción de elegir libre y voluntariamente» el régimen que mejor se ajuste a sus intereses, por cuanto cada uno tiene características disímiles y regladas, sin que en dicha decisión pueda ejercerse con obstrucción o presión alguna de empleador o terceros, so pena de incurrirse en las sanciones del artículo 271 ibídem.

Ahora, como se adocrinó por la Corte, entre otras, en las sentencias CSJ SL1421-2019 y CSJ SL1688-2019, las AFP, como actores privados en el nuevo sistema de seguridad social, «encargados de la gestión fiduciaria de los ahorros de los afiliados en el RAIS», son quienes desde un principio han estado sometidos a reglamentaciones, restricciones y deberes propios de las actividades que ejecutan, al estar inmersos en la prestación y/o administración de un servicio público de carácter obligatorio, que está bajo la dirección, coordinación y control del Estado, según el artículo 48 de la CN, contexto en el cual, según el numeral 1° del artículo 97 Decreto 663 de 1993, tienen «[...] la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de la información suficiente y transparente que permitiera al afiliado elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses». Lo anterior, como una forma de materializar el principio de transparencia en la elección las operaciones y opciones del mercado, y los de prevalencia del interés general y buena fe, de quienes prestan un servicio público.

Y en la SL1689 de 2019 se indica:

(i) Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional, a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional -artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, 97, numeral 1.° del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 y demás disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal-. Posteriormente, se agregó a dicho deber la obligación de otorgar asesoría y buen consejo -artículo 3.°, literal c) de la Ley 1328 de 2009, Decreto 2241 de 2010- y, finalmente, se impuso la exigencia de doble asesoría -Ley 1748 de 2014, artículo 3.° del Decreto 2071 de 2015, Circular Externa n.° 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera. Obligaciones que deben ser acatadas en un todo, a fin de que los usuarios del sistema puedan adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional.

(ii) En el campo de la seguridad social, existe un verdadero e ineludible deber de obtener un consentimiento informado (CSJ SL19447-2017), pues dicho procedimiento garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, que el usuario comprende las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen; esto es que, previamente a tal acto, aquel recibió información clara, cierta, comprensible y oportuna. Luego, el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente para dar por demostrado el deber de información.

(iii) La aseveración del afiliado de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarse el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación, por cuanto la documentación soporte del traslado debe conservarla en sus archivos, y en tanto es la obligada a observar el deber de brindar información y probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento.

(iv) Ni la legislación ni la jurisprudencia establecen que se debe contar con una expectativa pensional o derecho causado para que proceda la ineficacia del traslado a una AFP por incumplimiento del deber de información; de modo que procede sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Luego, acertada resulta la declaratoria de **ineficacia del acto de traslado** dispuesta por la primera instancia, caracterizada porque desde su nacimiento el acto carece de efectos jurídicos, siendo sus consecuencias idénticas a las de la nulidad – vuelta al estado anterior, explicándose por la Sala de Casación Laboral que en estos casos:

... los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros. Así mismo, ha dicho que esta declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues estos recursos, desde el nacimiento del acto ineficaz, han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJSL1689-2019, CSJSL3464-2019, CSJSL4360-2019 entre otras).

Y en sentencia SL2877-2020, radicación Nro. 78.666, fecha 29 de julio de 2020, frente al tema en concreto de las restituciones económicas, luego de transcribir el artículo 1746 del Código Civil, advirtió:

Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las

prescripciones legales, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.

Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular.

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cubre a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Subrayado intencional.

Y en relación con los porcentajes para el fondo de garantía de pensión mínima dijo:

En cuanto a los aportes para financiar la garantía de pensión mínima, es oportuno señalar que el artículo 14 de la Ley 797 de 2003 estableció aportes adicionales sobre el ingreso base de cotización con destino al fondo de solidaridad pensional para financiar la garantía de pensión mínima, para quienes devengaran entre 4 y 16 a 20 salarios mínimos legales mensuales, así como un fondo para el manejo de los mismos –artículo 14 ibídem-.

Pues bien, dicho artículo fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional, a través de sentencia C-797-2004, pero quedaron vigentes los aportes adicionales,

de modo que dichos recursos los manejan las administradoras de pensiones privadas, en una subcuenta separada hasta que se cree de nuevo un fondo similar que se encargue de su administración; de hecho, de la subcuenta de cada AFP se financian aquellas prestaciones. Así lo regula el artículo 8.º del Decreto 510 de 2003, hoy compilado en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1833 de 2016. Además, el artículo 7.º del Decreto 3995 de 2008 contempla que cuando se efectúe un traslado de recursos del RAIS al régimen de prima media con prestación definida, debe incluirse la cotización correspondiente para la garantía de pensión mínima.

Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones. Lo que desvirtúa la argumentación del a quo sobre el particular.

Y concluye la Corte:

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima».

Y en sentencia SL 081 de 2021, se reitera:

Como argumento adicional, la Sala debe señalar que la consecuencia derivada de la decisión de ineficacia también apareja que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías... deba devolver los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones... tal como se dejó sentado, entre otras, en las sentencias CSJ SL17595-2017 y CSJ SL4989-2018, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, y bajo el entendido que la consecuencia es la ineficacia del traslado, en la que se dijo:

Sobre las consecuencias de la nulidad del traslado entre regímenes esta Sala en sentencia SL, del 8 de sep. 2008, rad.31989, reiterada en varias oportunidades, adoctrinó:

[...]

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

"Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Bajo la misma línea, en decisión CSJ SL1688-2019, se manifestó:

Está probado que la AFP accionada consignó al ISS, hoy Colpensiones, los aportes que la demandante tenía en su cuenta individual con sus rendimientos (fl. 98 a 101), sin embargo, no existe constancia de que hubiese devuelto también los valores correspondientes a gastos de administración, los cuales según se expuso en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019, debe asumir con cargo a sus propios recursos.

Puntualizando:

se impone adicionar el numeral quinto de la misma decisión, con el fin de precisar que, además del capital ahorrado por la accionante, junto con los intereses y rendimientos producidos sobre el mismo, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A se encuentra en la obligación de trasladar a la Administradora Colombiana de Pensiones ... los valores correspondientes a los gastos de administración, los cuales, según se expuso en precedencia, debe asumir con cargo a sus propios recursos.

Posición que ha sido traída hasta la fecha, tal y como se puede evidenciar, entre otras, en la sentencia SL587 de 2021, SL3202 de 2021, SL4803-2021, SL4609-2021, SL587-2022 y SL1055-2022, por lo que acogiéndose por esta instancia un argumento de autoridad y acatándose el precedente que en línea mayoritaria sostiene la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, se impone entonces la confirmación de las restituciones ordenadas por el juez de primer grado, **adicionándose la sentencia para indicar que las mismas se harán dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.**

Cabe agregar que en atención a la modificación efectuada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (**ver entre otras,**

sentencias SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803-2021, SL4609-2021 y SL587-2022), procedente resulta, **en grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones,** ordenar la **indexación de los rubros correspondientes a gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima,** valores que deberá asumir la administradora con cargo a sus propios recursos.

Se indicará igualmente que, al momento de cumplirse la orden impartida, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Los rubros antes mencionados no se encuentran afectados por el fenómeno extintivo de la prescripción, pues pese a que los mismos no están ligados al reconocimiento de la prestación, si están íntimamente relacionados con la declaratoria de ineficacia, la cual según criterio de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral al ser una pretensión declarativa no se extingue por el paso del tiempo, sumado a que solo en el trámite del proceso es que fue declarada y como consecuencia se dispone su restitución.

Sin costas en esta instancia al analizarse la decisión en el grado jurisdiccional de consulta.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín,** administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **adiciona y confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Mireya Ortega**

Reina, para indicar que la **AFP Colfondos S.A.** debe restituir a **Colpensiones,** dentro de los **treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia** el saldo de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluidos los rendimientos financieros, y las sumas descontadas para seguro previsional, garantía de pensión mínima y gastos de administración, durante el tiempo de vigencia de la vinculación a esa sociedad, estos tres últimos conceptos debidamente indexados. Se agrega que, al momento de cumplirse la orden impartida a la AFP, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. **En lo demás se confirma.**

Sin costas en esta instancia al analizarse la decisión en el grado jurisdiccional de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO,** que se fijara por **secretaria por el término de un día,** en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado